

“ENTRE ELECCIONES Y CONFLICTO SOCIAL”

A ocho semanas de los comicios del 17 de agosto, el foro “Diálogos al Café – Marcos Escudero” reunió a la politóloga María Teresa Zegada, el encuestador Manuel Suárez y el historiador-periodista Fernando Molina para retratar un país que oscila entre la expectativa electoral y el riesgo de un nuevo quiebre social. En un escenario marcado por el colapso del MAS como fuerza hegemónica, la ausencia de partidos estructurados, una ciudadanía atrapada entre el pesimismo económico y la fragilidad institucional, los tres analistas ofrecieron un diagnóstico preciso: Bolivia se encamina a unas elecciones cargadas de incertidumbre, con una oposición fragmentada, un Estado incapaz de ejercer control territorial pleno y una economía que exige un ajuste inminente. Coincidieron en que las elecciones son inaplazables, que el ajuste será inevitable y que solo un pacto amplio e inclusivo—que no excluya ni al evismo ni a las bases sociales—podrá sostener la gobernabilidad y evitar una recaída en el conflicto.

DEL MAS FRACTURADO AL VACÍO DE PARTIDOS: ¿QUIÉN ARTICULA EL PODER?

Durante su intervención, Marité Zegada dibujó un escenario político profundamente erosionado. En Bolivia —sostuvo— ya no se puede hablar de sistema de partidos. Las siglas, los colores y los lemas han perdido capacidad de referencia entre la ciudadanía, y el MAS, que en su momento condensó una identidad política orgánica, se encuentra hoy al borde de la desintegración. La ruptura entre Evo Morales y Luis Arce ha dejado a las organizaciones sociales sin brújula, y la candidatura de Andrónico Rodríguez aparece más como una construcción de emergencia que como un proyecto consolidado.

A esta fragmentación se suma un deterioro institucional preocupante. El Tribunal Constitucional opera sin mandato vigente, el Órgano Electoral se percibe débil e indeciso, y el Estado ha mostrado incapacidad para ejercer control territorial efectivo, como se evidenció en el trópico cochabambino y regiones como Llallagua. Las alianzas entre sectores sociales y estructuras criminales, como el narcotráfico, agravan la crisis, dejando huecos no solo en la institucionalidad, sino también en la noción misma de soberanía.

En este contexto, el dilema central no es quién ganará las elecciones, sino con qué capacidad real podrá gobernar el próximo presidente. Zegada advirtió que la gobernabilidad ya no se juega únicamente en el Parlamento, sino en la relación con una sociedad atomizada, desconfiada y muchas veces organizada al margen del Estado. La advertencia quedó flotando: sin estructuras partidarias sólidas ni una arquitectura estatal funcional, cualquier nuevo gobierno podría quedar rápidamente atrapado en su propia impotencia.

PESIMISMO RÉCORD Y VOTO DISPERSO: RADIOGRAFÍA DE LAS ENCUESTAS

Manuel Suárez, con base en las encuestas más recientes, pintó una radiografía descarnada del humor social: más del 90 % de los bolivianos cree que el país va por mal camino, un nivel de pesimismo incluso superior al registrado durante la pandemia. Este estado de ánimo se traduce en

una desconfianza generalizada hacia la política, una fuerte desilusión frente a las propuestas electorales y una sensación extendida de que no existe una salida visible a corto plazo.

El factor económico domina el malestar. La ciudadanía identifica como problemas prioritarios el alza de precios, la escasez de dólares, la falta de empleo y la corrupción, entendida esta última no como un fenómeno ético aislado, sino como causa directa del deterioro económico. La lectura pública es clara: “hay crisis porque se han robado la plata”.

En cuanto al tablero electoral, Suárez identificó un triple empate en la punta. Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga aparecen ligeramente por encima, mientras Andrónico Rodríguez —quien lideraba en mayo— cae al tercer lugar tras el impacto negativo de los bloqueos. Manfred Reyes Villa, en cambio, se afianza como fuerza estrictamente local en Cochabamba. Aún más revelador: más del 55 % del electorado se inclina por opciones opositoras, mientras que el voto fiel al MAS ronda el 20 a 25 %, evidenciando un cambio de ciclo.

Para Suárez, este nuevo mapa anticipa tres certezas: el MAS llega para perder, la oposición no tendrá mayoría absoluta y la futura gobernabilidad dependerá de pactos amplios, negociados en un Congreso altamente fragmentado.

HISTORIA, PRESIÓN EXTERNA Y EL PACTO IMPOSTERGABLE

Fernando Molina propuso una mirada en perspectiva histórica para entender el presente. Comparó la coyuntura actual con la crisis económica que precedió a la hiperinflación de 1985. Así como entonces, hoy se combinan la escasez de reservas, un dólar paralelo desbordado y un Estado fiscalmente quebrado. Pero la gran pregunta, según Molina, no es si se requiere un ajuste —eso parece inevitable—, sino en qué momento del ciclo estamos: ¿en el borde del colapso que permitirá medidas drásticas con legitimidad social, como en 1985? ¿O en un estadio más temprano, donde cualquier intento de ajuste puede encender aún más la crisis, como ocurrió en 1982 bajo la UDP?

Molina también llamó la atención sobre el fin del ciclo caudillista de Evo Morales. Su figura —que durante 14 años organizó la política nacional desde una hegemonía incuestionable— ha quedado atrapada entre el rechazo social y la falta de relevo dentro del MAS. No obstante, su retirada no garantiza estabilidad: el sistema político boliviano, acostumbrado a operar en torno a figuras fuertes, aún no encuentra un nuevo orden. Sin un caudillo dominante ni partidos sólidos, la transición hacia un modelo pactado parece ineludible.

Este vacío interno coincide con un contexto regional adverso. Mientras gobiernos como el de Milei en Argentina cierran fronteras, países vecinos levantan alertas sobre la debilidad estatal boliviana, el contrabando y la expansión de economías ilegales. A diferencia de otros momentos de cambio, Bolivia no cuenta hoy con padrinzos internacionales —ni de Washington ni del eje progresista latinoamericano— que ayuden a ordenar su política interna. La única fuerza que puede generar estabilidad está dentro del país: un pacto amplio, que incluya al evismo y a las bases sociales, y que evite el error de intentar gobernar por exclusión. En palabras del propio Molina, el ajuste debe “tocarnos a todos” si quiere tener legitimidad.

CONSIDERACIONES FINALES

El cierre del foro dejó claro que la ciudadanía no solo espera elecciones, sino que las ve como una salida impostergable. La posibilidad de postergarlas se percibe como una provocación intolerable: más del 70 % de los encuestados dice estar dispuesto a movilizarse si se intenta suspenderlas. Esa presión social, sumada al desgaste del gobierno de Arce y al agotamiento del conflicto, hace que los panelistas coincidan en que el 17 de agosto será una cita inevitable.

Más que una contienda entre candidatos, lo que se juega en agosto es la posibilidad de evitar que la inestabilidad se transforme en colapso. El país no está ante una simple elección presidencial: está ante un punto de inflexión. De su capacidad para transformar la fragmentación en pacto dependerá no solo quién gobierne, sino si ese gobierno puede durar.

Disertantes: **M. Teresa Zegada** (CERES)
Manuel Suárez (Consultor Electoral)
Fernando Molina (Escritor y Periodista)

Moderador: **Daniel Moreno**

Enlaces de Video:

- **Facebook:**
<https://www.facebook.com/share/v/18Bj8qLHPN/>
- **YouTube:**
https://youtu.be/2UrZNaZ_HU (Presentación)
<https://youtu.be/JfCZBhRljn4> (Preguntas & Comentarios)